GOBIERNO DE PUERTO RICO

16^{ta.} Asamblea
Legislativa

6^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2303

5 de octubre de 2011

Presentado por el señor *Rivera Schatz*; la señora *Nolasco Santiago*; el señor *Seilhamer Rodríguez*, la señora *Arce Ferrer*; el señor *Ríos Santiago*; la señora *Padilla Alvelo*; el señor *Berdiel Rivera*; la señora *Burgos Andújar*; los señores *Díaz Hernández*, *González Velázquez*, *Iglesias Suárez*, *Martínez Santiago*, *Muñiz Cortés*; las señoras *Peña Ramírez*, *Raschke Martínez*, *Romero Donnelly*, *Santiago González*, *Soto Villanueva*; el señor *Torres Torres*; y la señora *Vázquez Nieves*

Referido a la Comisión Especial sobre el Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico

LEY

Para disponer la celebración de un proceso de dos consultas sobre el Estatus Político de Puerto Rico a llevarse a cabo, la primera, el 12 de agosto de 2012, conjuntamente con el referéndum especial sobre la reforma legislativa, y la segunda, el 6 de noviembre de 2012, conjuntamente con las elecciones generales; para determinar su estructura y operación; asignar fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por décadas, los puertorriqueños hemos buscado alternativas para definir de forma permanente nuestra relación con Estados Unidos de América y tener un estatus no territorial ni colonial. En 1952, el Congreso autorizó la organización del gobierno local y su constitución interna, para el que se adoptó el nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). No obstante, la insatisfacción de los puertorriqueños por la falta de oportunidades de desarrollo social, político y económico ligadas a la presente relación jurídica ha ido en aumento. Varios plebiscitos celebrados en Puerto Rico, autorizados mediante legislación local, demuestran que el apoyo a la relación jurídica actual se ha reducido de 60.5% en 1967 a 48.6% en 1993. Incluso, en el plebiscito de 1998, la mayoría de los puertorriqueños reiteraron su inconformidad con la situación política presente. En vista de que la designación de Estado Libre Asociado se ha

utilizado comúnmente para referirse al actual estatus político territorial de Puerto Rico, y en el interés único de simplificar el entendimiento del texto de este estatuto, aquí la utilizamos para identificar dicho estatus.

Luego de varios intentos por llegar a un acuerdo sobre la forma más apropiada de atender el asunto del estatus político, en el 2005 todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico llegaron a un acuerdo histórico que permitió la aprobación por unanimidad de un proyecto de ley que viabilizaría una consulta al Pueblo de Puerto Rico sobre su futuro político. El Sustitutivo a los Proyectos de la Cámara 1014, 1054 y 1058 autorizaba la celebración de un referéndum en el cual los puertorriqueños tendrían la oportunidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con exigir al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que se comprometieran con responder al reclamo del Pueblo de Puerto Rico para resolver el problema del estatus político entre alternativas plenamente democráticas de naturaleza no colonial ni territorial. A pesar de su aprobación unánime en la Asamblea Legislativa, el mismo fue vetado por el entonces Gobernador.

En diciembre de ese mismo año, el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico (Grupo de Trabajo), creado por la Casa Blanca mediante Orden Ejecutiva firmada por el Presidente William J. Clinton en el 2000, y que continuó sus labores durante las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, rindió su primer informe en el que hizo varias recomendaciones sobre cómo solucionar el problema del estatus político de Puerto Rico. En el referido informe de diciembre del 2005, el Grupo de Trabajo expresó de manera inequívoca que bajo el ELA, Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. De igual forma, el Grupo de Trabajo expresó la inviabilidad constitucional del llamado “ELA Mejorado” o “New Commonwealth”, por el que algunos sectores han abogado.

La recomendación principal de ese primer informe del Grupo de Trabajo fue que en el término de un año, el Congreso legislara para que los puertorriqueños pudieran votar en una primera consulta sobre si deseaban continuar siendo un territorio de Estados Unidos sujeto a la Cláusula Territorial o alcanzar un estatus permanente no territorial ni colonial. De ganar la segunda alternativa, según el informe, entonces debería celebrarse una segunda consulta entre la estadidad y la independencia, las cuales, según el informe del Grupo de Trabajo, son las únicas dos alternativas constitucionalmente viables. Cabe destacar que el propio informe reconoce que

la independencia puede tener varias formas; a saber: la independencia tradicional, como ocurrió en el caso de Filipinas, o la independencia mediante un pacto de libre asociación, como el que existe entre Estados Unidos y varias islas del Pacífico. Si en la primera consulta los puertorriqueños optaban por mantener el actual estatus territorial, el informe recomendaba la celebración periódica de plebiscitos para mantener al Congreso informado sobre la preferencia de los puertorriqueños hasta tanto se obtuviera un resultado a favor de alguna de las opciones no territoriales.

El Grupo de Trabajo rindió un segundo informe en diciembre de 2007 en el que reiteró las conclusiones plasmadas en el informe de 2005. Sobre la viabilidad constitucional del “Nuevo ELA” o “New Commonwealth”, el Grupo de Trabajo expresó: “The U.S Constitution would not permit the ‘New Commonwealth’ proposal because land under the United States sovereignty must either be a State or a Territory”. (Ver Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de diciembre del 2007, pág. 6). No obstante, el informe concluye que una forma de independencia como la libre asociación se asemeja bastante a lo que parecen ser las aspiraciones de aquellos que proponen un “Nuevo ELA” o “ELA Mejorado” fuera de la Cláusula Territorial. En ese caso, según lee el mismo informe, dicho pacto de libre asociación podría ser variado unilateralmente por cualquiera de las partes. (Ver Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de diciembre del 2007, pág. 8). En cuanto a la forma de resolver el problema del estatus, el Grupo de Trabajo reiteró la misma recomendación para la celebración de las dos consultas esbozadas en su primer informe. El informe reiteró que sólo existen tres alternativas disponibles para el estatus político futuro de Puerto Rico: mantener la actual situación territorial, la estadidad y la independencia. Como mencionamos anteriormente, el informe reconoce la libre asociación como una forma de independencia.

Desde sus inicios, la administración del Presidente Obama ha manifestado su compromiso de permitir que los puertorriqueños se expresen sobre el futuro político de la Isla y resolver el problema de estatus de Puerto Rico durante el presente cuatrienio. A tenor con tal compromiso, el Presidente Obama firmó, el 30 de octubre de 2009, la Orden Ejecutiva Núm. 13517, que ordenaba al Grupo de Trabajo solicitar consejos y recomendaciones sobre medidas que promuevan la generación de empleo, educación, cuidado de la salud, energía limpia y desarrollo económico en la Isla, sin desviar su principal atención del tema del estatus. (Véase

Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 3).

A tenor con los deberes y responsabilidades establecidos por la antes mencionada Orden Ejecutiva, el Grupo de Trabajo se convocó en diciembre de 2009. Como parte de sus trabajos, organizó dos sesiones de vistas públicas en San Juan y Washington D. C. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág 3). En dichas vistas, se escuchó directamente una gran variedad de voces sobre los asuntos de estatus y desarrollo económico. Además, cientos de residentes de Puerto Rico y de Estados Unidos continental ofrecieron sus comentarios por medios electrónicos o cartas. Miembros del Grupo de Trabajo también se reunieron con líderes del Congreso, funcionarios electos de Puerto Rico y otras partes interesadas. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág.3).

Luego de recibir el insumo de todas las partes interesadas, el 16 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo rindió un nuevo informe, el cual contenía recomendaciones en las áreas antes mencionadas. Aunque dicho informe discutía diferentes áreas, como el desarrollo económico y las labores de limpieza de la isla de Vieques, su enfoque principal recaía en el tema del estatus. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 3). El Informe del Grupo de Trabajo estableció que las audiencias públicas y las reuniones celebradas revelaron que el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo puertorriqueño. Por tanto, el Grupo de Trabajo se comprometió a examinar, desde una nueva perspectiva, los asuntos del estatus y estableció que estaba comprometido a “avanzar con la resolución del asunto del estatus de manera significativa, con el objetivo de resolverlo en un periodo corto [de tiempo]” (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 25).

Una vez más, el Grupo de Trabajo fue tajante al afirmar que “[c]on la opción de[l] [E]stado [L]ibre [A]sociado, Puerto Rico seguirá regido, como lo está ahora, por la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos”. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 28).

Cabe destacar, que esta aseveración es reafirmada por la Constitución de Estados Unidos y por la de Puerto Rico, al igual que por la legislación aplicable. La Constitución de Estados Unidos, en lo pertinente, dispone que “[e]l Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las

reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos” Art. IV, Sec. 3 de la Constitución de Estados Unidos.

Basados en esta disposición constitucional, el Congreso de Estados Unidos ha regulado la jurisdicción de Puerto Rico al amparo de la cláusula territorial. Por ejemplo, la propia Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico en su Sección 1 dispone, entre otras cosas que:

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos, y a las aguas de esas islas; y el nombre de Puerto Rico, usado en esta Ley, se entenderá que incluye no sólo a la isla de este nombre sino también a todas las islas adyacentes, como queda dicho. 1 L.P.R.A. Ley de Relaciones Federales.

Además, la Constitución de Puerto Rico en su Artículo VII, Sección 3, en lo pertinente, dispone que:

Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero, adoptada con el carácter de un convenio.

La sujeción de Puerto Rico a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos ha sido reafirmada por el Congressional Research Service tan recientemente como en junio de 2011, por Opiniones del Departamento de Justicia Federal y por la decisión más categórica del Tribunal Supremo Federal sobre el carácter territorial de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico en el caso de Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). En este caso, el Tribunal Supremo Federal resolvió que el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para ejercer sus poderes sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial y tratarlo diferente con relación a los estados.

El Grupo de Trabajo fue enfático al establecer que los puertorriqueños deben determinar, por sí mismos, el estatus futuro de la isla. Más aún, el Grupo de Trabajo recomendó que “el Presidente y el Congreso apoyen cualquier esfuerzo justo, transparente y expedito que refleje y esté conforme con la voluntad del pueblo puertorriqueño”. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 26). Basado en la

información recopilada, el Grupo de Trabajo emitió sus recomendaciones sobre las opciones permisibles de estatus. Sobre este particular, concluyó que existen 4 alternativas permisibles de estatus: (1) la Estadidad, que significaría para los puertorriqueños plena representación en el Congreso, participación en las elecciones presidenciales y el derecho a recibir asistencia del gobierno federal idéntica a la recibida por los demás estados; (2) la Independencia, la cual requeriría legislación del Congreso para proveer la transición de Puerto Rico a un país plenamente soberano y un periodo suficiente para que se puedan atender asuntos tales como la ciudadanía americana, posibles restricciones de viajes a Estados Unidos, reglamentación sobre inmigración, acuerdos de seguridad y la ayuda económica que fuere necesaria; (3) la Libre Asociación, un tipo de independencia seguida de un pacto que establecería que Estados Unidos y Puerto Rico han acordado las relaciones específicas que se detallan en el pacto, el cual puede ser alterado o terminado unilateralmente por cualquiera de las partes; y por último, (4) el actual Estado Libre Asociado, en el cual Puerto Rico permanecería, como hoy día, sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución Federal. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág 26-28). Es decir, que el Grupo de Trabajo concluyó que las opciones disponibles a los puertorriqueños son el mantener la actual situación política bajo un ELA sujeto a la Cláusula Territorial u optar por alguna de las fórmulas descolonizadoras reconocidas internacionalmente: estadidad, independencia y libre asociación.

Al abordar la definición del Estado Libre Asociado, el Grupo de Trabajo fue claro en que el concepto de Estado Libre Asociado “mejorado”, basado en un acuerdo entre Puerto Rico y Estados Unidos que no se pueda alterar salvo que exista consentimiento mutuo, no es constitucionalmente viable porque un Congreso futuro podría modificar unilateralmente dicha relación. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 28).

El Grupo de Trabajo también emitió sus recomendaciones en cuanto a los posibles procesos de consulta para resolver el problema del estatus. En cuanto a la elegibilidad para participar en el proceso, el Grupo de Trabajo fue enfático en que sólo los residentes de Puerto Rico podrán votar. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 28-29). El informe del Grupo de Trabajo resumió algunos de los métodos que podrían utilizarse para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. Estas alternativas son recomendaciones y no constituyen una limitación al ejercicio del

Pueblo de Puerto Rico de su derecho a la autodeterminación. Esto fue reafirmado por el propio Presidente, Barack Obama, en su visita a Puerto Rico el 14 de junio de 2011.

La mayor parte de la discusión del informe sobre el particular se centra en las diversas modalidades de consultas o plebiscitos que se podrían celebrar. En particular, el Grupo de Trabajo discutió las ventajas y desventajas de celebrar una sola consulta en contraposición a un proceso de dos consultas o plebiscitos celebrados en fechas distintas.

En cuanto a la posibilidad de celebrar un sólo plebiscito, el informe sostiene que las mayores ventajas de esta alternativa son la simplicidad del proceso, el costo y la rapidez en que se podrían obtener los resultados. No obstante, reconoce que podría provocar una votación fragmentada, con resultados poco claros y poco confiables, como ha sucedido en el pasado con este tipo de consulta única. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 29). Por otra parte, el Grupo de Trabajo menciona varias posibles modalidades de un proceso de más de una consulta que, a su juicio, podrían arrojar resultados justos y legítimos. En todas las modalidades mencionadas en el informe, la primera consulta serviría para delimitar las opciones y la segunda para llegar a una decisión final.

Entre las opciones discutidas, el informe menciona el sistema de plebiscitos dispuestos en el H.R. 2499. Dicho proyecto proponía la celebración de dos consultas. En la primera consulta, los puertorriqueños se expresarían sobre si quieren mantener el estatus actual o si desean un estatus diferente fuera de la Cláusula Territorial. En la segunda consulta, asumiendo que en la primera resultara victoriosa la alternativa de cambiar de estatus, los puertorriqueños seleccionarían entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. Aunque el Proyecto fue enmendado para volver a incluir en la segunda consulta al actual estatus político, debido a las críticas de ciertos sectores, el informe no descartó de plano esta opción y, por el contrario, la mantuvo entre las posibles alternativas disponibles al Pueblo de Puerto Rico para ejercer su derecho a la autodeterminación. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 30). De hecho, el H.R. 2499, según enmendado y aprobado por la Cámara federal, nunca fue aprobado por el Senado de Estados Unidos. Más aún, resultaría contradictorio y un ejercicio en futilidad, incluir en la segunda consulta, la cual contiene alternativas no coloniales ni territoriales, una opción sujeta a la Cláusula Territorial de Estados Unidos que haya sido rechazada en la primera consulta.

Otra alternativa que el informe sugirió fue invertir el orden de las consultas. De igual forma, el Grupo de Trabajo expresó que tendría “cierto atractivo” un proceso en el cual se consulte primero a los puertorriqueños si quieren ser parte de Estados Unidos o si quieren separarse. Según el informe, un proceso como éste atendería la “cuestión fundamental” de si los puertorriqueños quieren ser parte de Estados Unidos o no. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 30). El Informe, sin embargo, no es claro en cuanto al significado o consecuencia jurídica o política del concepto o frase “ser parte de los Estados Unidos”.

Es menester resaltar que el propio informe reconoce que hay diversos métodos que pueden lograr resultados justos y legítimos y que sus recomendaciones no son taxativas. (Véase Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico de marzo de 2011, pág. 26). De hecho, el informe menciona explícitamente algunas de esas otras opciones. Más aún, el propio Presidente enfatizó que lo importante es que los puertorriqueños hagan una expresión clara. El Presidente sostuvo que dicha expresión se puede dar mediante alguno de los métodos mencionados en el informe los cuales, según el primer mandatario, pueden ser modificados, o mediante otro método que pueda lograr un resultado justo y legítimo.

Esta Asamblea Legislativa está comprometida con viabilizar un proceso de autodeterminación que permita al Pueblo de Puerto Rico expresarse libremente sobre su futuro político y su relación con Estados Unidos de América. Cónsono con ello, entendemos necesario legislar para iniciar ese proceso de descolonización que permita conocer la voluntad de nuestro Pueblo y exigirle al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que respeten y viabilicen esa voluntad. El proceso debe ser uno amplio e inclusivo. Es por ello que, con el firme propósito de resolver el problema de estatus mediante un proceso justo y equitativo, que sea aceptable para todas las partes que tengan un genuino interés en atender el asunto del estatus, esta Asamblea Legislativa aprobará una medida después de escuchar directamente al Pueblo de Puerto Rico, a través de un amplio proceso de vistas públicas a celebrarse en distintas partes de la Isla, para asegurar la mayor participación ciudadana posible. Al legislar dicho proceso, debemos guiarnos por varios principios que entendemos son fundamentales y que en gran medida están recogidos en los tres informes emitidos por el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca.

En primer lugar, entendemos que el proceso debe ser uno inclusivo que permita la más amplia participación de los puertorriqueños, independientemente de su preferencia de estatus.

En segundo lugar, el proceso debe ser uno sencillo y que viabilice una expresión clara de nuestro pueblo. Además, es conveniente tomar en cuenta las experiencias pasadas y aprender de los éxitos y fracasos de procesos de estatus anteriores, tanto a nivel local como federal. De igual forma, y reconociendo el valor de los informes rendidos por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, debemos tomar como punto de partida las recomendaciones hechas en los referidos informes. Ciertamente, conforme a lo expresado por el Presidente Obama en su reciente visita a Puerto Rico, las recomendaciones hechas en los referidos informes son unas guías que pueden ser modificadas y mejoradas. A fin de cuentas, lo importante es viabilizar una expresión clara por parte de nuestro Pueblo mediante un resultado justo y legítimo.

Cónsono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa propone combinar varias de las alternativas propuestas por el Grupo de Trabajo, de forma que podamos maximizar las fortalezas de cada una de éstas y lograr los consensos esperados. Así, entendemos conveniente adoptar la alternativa propuesta por el Grupo de Trabajo en cuanto a un proceso consistente en dos consultas.

En la primera consulta se preguntará al Pueblo si quiere permanecer bajo la condición presente sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos o si quiere optar entre alternativas permanentes, no territoriales y no coloniales. En la segunda consulta los electores podrán seleccionar entre alternativas permanentes, no coloniales ni territoriales. De esta forma, atendemos el reclamo de que el proceso sea uno inclusivo y no se excluya a ningún sector significativo. El proceso aquí propuesto permitirá que se pueda consultar al Pueblo si quiere mantener el ELA actual sujeto a la Cláusula Territorial o si quiere optar por alternativas no territoriales ni coloniales.

Ciertamente, tal y como reconoce el Grupo de Trabajo, el orden de las preguntas es un asunto delicado que podría estar sujeto a críticas por parte de algunos de los sectores, sin importar el orden seleccionado. Sin embargo, el orden de las preguntas seleccionado para este proceso responde únicamente a lo que esta Asamblea Legislativa entiende que es la pregunta fundamental y, por tanto, la primera que debe ser constatada por el Pueblo de Puerto Rico. Esto es, si queremos cambiar el estatus actual bajo la Cláusula Territorial o no. Es esta pregunta la que activa todo el proceso que sigue. La realidad es que si una mayoría de nuestro Pueblo está satisfecho con el estatus territorial actual, la consulta sobre las alternativas no territoriales ni coloniales es un ejercicio fútil, al menos a corto plazo. Todo proceso encaminado a resolver el

futuro político de Puerto Rico parte de la premisa de que la situación actual ya no cuenta con el respaldo mayoritario de nuestro pueblo y, por tanto, el Presidente y el Congreso deben responder a un reclamo para cambiarla. El asunto fundamental es constatar si los puertorriqueños están insatisfechos con el ELA territorial y si, en consecuencia, queremos elegir otras opciones.

De conformidad con lo anterior, se ordena una consulta al Pueblo de Puerto Rico para que exprese, en primer lugar, si desea continuar con la condición política actual de un Estado Libre Asociado sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos o si quiere optar por un cambio entre alternativas no territoriales ni coloniales. De ganar la opción de cambiar el estatus político actual, entonces el electorado deberá contestar cuál alternativa prefiere entre la Estadidad, la Independencia o el Estado Libre Asociado Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, según definido por el Partido Popular Democrático en su Programa de Gobierno vigente, y que fue aprobado por los organismos oficiales de dicha colectividad política.

A juicio de esta Asamblea Legislativa, el proceso aquí dispuesto está dentro de los parámetros delineados por el Grupo de Trabajo en sus informes y viabilizará un resultado justo y legítimo, con una expresión clara del Pueblo de Puerto Rico, tal y como ha reclamado el Presidente. El proceso seleccionado combina varios elementos importantes entre las alternativas propuestas por el Grupo de Trabajo, atiende las preocupaciones expresadas por sus miembros sobre cada una de ellas y maximiza sus fortalezas. La forma en que se ha decidido formular las preguntas resultará en respuestas justas y claras. Finalizado el proceso sabremos con claridad, primero, si nuestro pueblo desea cambiar el actual estatus político territorial y, segundo, sabremos cuál de las alternativas para dotar al Pueblo de Puerto Rico de un estatus político no territorial ni colonial tiene un mayor respaldo de los puertorriqueños.

La inclusión del ELA territorial actual en la primera consulta provee a aquellos que deseen defender dicha fórmula de estatus la oportunidad de votar por esta opción y evidenciar el respaldo que tenga de nuestro Pueblo. Evidentemente, si en la primera consulta resulta favorecida la opción de no cambiar nuestro actual estatus político, la celebración de la segunda consulta es innecesaria.

El proceso dispuesto en esta ley persigue ser uno equitativo, inclusivo y justo. Este atiende la preocupación expresada por el Grupo de Trabajo en su más reciente informe, a los efectos de que cualquier consulta a los puertorriqueños debe dar la oportunidad de optar por

mantener el ELA Territorial actual. Además, en aras de ser lo más inclusivos posibles y que ningún sector significativo quede excluido en el proceso, los electores tendrán la oportunidad de votar por un estatus llamado Estado Libre Asociado Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal, consignado en el vigente programa de Gobierno del Partido Popular Democrático y reafirmado en su documento oficial intitulado Pacto de Futuro: Contrato Social para la Transformación de Puerto Rico. Dicha alternativa está enmarcada en Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocen la estadidad o integración, la independencia u otro arreglo por acuerdo mutuo entre países soberanos. Esta opción tendría que cumplir con las normas del derecho internacional sobre igualdad soberana.

Por último, en relación con la fecha para llevar a cabo estas consultas, es menester tener presente que durante el año 2012 se estará consultando al Pueblo sobre una enmienda constitucional para reducir el número de miembros de la Asamblea Legislativa. Hubiese sido nuestro deseo que dicha consulta se pudiera celebrar conjuntamente con las elecciones generales para ahorrarle dinero al Pueblo de Puerto Rico. No obstante, la minoría legislativa se negó a votar a favor de la referida propuesta por lo que su aprobación no contó con las tres cuartas partes requeridas para celebrar dicha consulta el día de las elecciones. En vista de ello, y con el fin de ahorrar dinero a nuestro Pueblo, se dispone que la primera consulta sobre el estatus, en la cual se le preguntará al Pueblo si quiere permanecer sujeto a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos o si quiere optar entre alternativas permanentes, no territoriales y no coloniales, se llevará a cabo conjuntamente con el referéndum especial sobre la reforma legislativa, el cual celebraremos el 12 de agosto de 2012. De resultar favorecida la opción de cambiar nuestro actual estatus político territorial, se dispone que la segunda consulta de estatus, en la cual los electores podrán seleccionar entre alternativas permanentes, no coloniales ni territoriales, se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2012, conjuntamente con las elecciones generales.

La celebración de ambas consultas de estatus, la primera junto al referéndum especial sobre la reforma legislativa y la segunda junto a las elecciones generales, tiene varias ventajas. En primer lugar, promueve una mayor participación de los puertorriqueños. En segundo lugar, representa un menor costo para el Pueblo de Puerto Rico ya que se pueden utilizar los mismos recursos que utilizará la Comisión Estatal de Elecciones para los otros dos eventos electorales. Se trataría sencillamente de incluir una papeleta adicional y otros ajustes menores que no

representan un costo significativo. Además, las fechas de agosto y noviembre de 2012 permitirán tener tiempo suficiente para orientar a los puertorriqueños sobre ambas consultas. También atenderemos el reclamo de algunos sectores, incluyendo a líderes del Partido Popular Democrático, de que las consultas se celebren con bastante proximidad entre sí. Finalmente, con esta ley damos fiel cumplimiento al compromiso contraído con nuestro Pueblo de consultarle sobre su preferencia de estatus dentro del presente cuatrienio. Los funcionarios electos en noviembre de 2012 tendrán también un mandato claro del Pueblo para resolver el problema del estatus de conformidad con la consulta y hacer gestiones que conduzcan a dicha solución desde el primer día de su nuevo mandato. De igual forma, se dará notificación oficial de los resultados al nuevo Congreso electo en noviembre de 2012 y al nuevo Presidente.

Esta Asamblea legislativa está plenamente convencida de que esta ley representa un paso de avance de gran importancia para resolver finalmente y de forma permanente el centenario problema del estatus político de Puerto Rico. Esta medida establece un proceso que recoge y combina los elementos más importantes de los informes del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico y varias propuestas de los principales partidos políticos en Puerto Rico. Además, es el resultado de los diálogos propiciados por el Gobernador de Puerto Rico entre los principales partidos políticos, con el fin de alcanzar un consenso sobre el particular. Este proceso le dará una oportunidad única a los puertorriqueños de enviar un mensaje claro al Presidente y al Congreso de Estados Unidos sobre cómo queremos resolver el problema del estatus y cómo queremos definir nuestra relación con Estados Unidos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Con el objetivo de que pueda establecerse un proceso efectivo, que permita al
2 Pueblo Puertorriqueño expresarse en cuanto al tema del estatus de Puerto Rico de una manera
3 justa, transparente y expedita, se realizarán dos consultas. La primera se llevará a cabo el 12 de
4 agosto de 2012, conjuntamente con el referéndum especial sobre la reforma legislativa, y la
5 segunda, en caso de que proceda, el 6 de noviembre de 2012, conjuntamente con las elecciones
6 generales. Ambas consultas se detallan a continuación:

1 (a) Primera Consulta: En la primera consulta se le preguntará al Pueblo si prefiere
2 continuar con el estatus político actual sujeto a la Cláusula Territorial de la
3 Constitución de Estados Unidos, conocido como Estado Libre Asociado, o si prefiere
4 un estatus político permanente no territorial ni colonial, no sujeto a la Cláusula
5 Territorial de la Constitución de Estados Unidos. La primera consulta leerá de la
6 siguiente manera:

7 “Instrucciones: Marque la opción de su preferencia. La papeleta con más de una
8 (1) opción marcada en esta sección no será contabilizada.

9 Prefiero continuar con el estatus político actual, sujeto a la Cláusula
10 Territorial de la Constitución de Estados Unidos, conocido como Estado Libre
11 Asociado. Si está de acuerdo, marque aquí ____.

12 Prefiero un estatus político permanente no colonial ni territorial, no sujeto
13 a la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. Si está de acuerdo,
14 marque aquí ____.”

15 (b) Segunda Consulta: En la segunda consulta, se le preguntará al Pueblo qué alternativa
16 no colonial ni territorial prefiere, en caso de que, en la primera consulta, resulte
17 victoriosa la opción de un estatus político permanente no colonial, ni sujeto a la
18 Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. La segunda consulta leerá
19 de la siguiente manera:

20 “Instrucciones: Marque la opción de su preferencia. La papeleta con más de una
21 (1) opción marcada en esta sección no será contabilizada.

22 (i) Estadidad: Prefiero que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos
23 con iguales derechos, beneficios y responsabilidades que los demás

1 estados de la Unión, incluyendo derecho a plena representación en el
2 Congreso y participación en las elecciones presidenciales, y que se
3 requiera al Congreso federal que promulgue la legislación necesaria para
4 iniciar la transición hacia la estadidad. Si está de acuerdo marque aquí___.

5 (ii) Independencia: Prefiero que Puerto Rico sea una nación soberana y
6 totalmente independiente de Estados Unidos y que se requiera al Congreso
7 federal que promulgue la legislación necesaria para iniciar la transición
8 hacia la nación independiente de Puerto Rico. Si está de acuerdo marque
9 aquí___.

10 (iii) Estado Libre Asociado Soberano: Prefiero que Puerto Rico adopte un
11 estatus no territorial ni colonial, fuera de la Cláusula Territorial de la
12 Constitución de Estados Unidos, que reconozca la soberanía del Pueblo de
13 Puerto Rico. El Estado Libre Asociado Soberano se basaría en una
14 asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se
15 acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.
16 Dicho acuerdo dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que el
17 Pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos y
18 retendría los restantes poderes o autoridades jurisdiccionales. Si está de
19 acuerdo, marque aquí_____.”

20 Artículo 2.- La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá las dos papeletas a
21 utilizarse, las cuales deberán ser de tamaño uniforme, impresas en tinta negra y en papel grueso,
22 de manera que lo impreso en ésta no se trasluzca al dorso. En la papeleta que se utilizará para

1 llevar a cabo la primera consulta aparecerá, a todo lo ancho de la misma y en la parte superior lo
2 siguiente:

3 “Consulta sobre el Estatus Político de Puerto Rico”

4 Debajo aparecerán dos (2) columnas, una al lado de la otra, con el texto ennegrecido, con
5 cada una de las opciones establecidas para dicha consulta, según definidas en el Artículo 1 de
6 esta Ley y debajo de éstas un espacio para la marca del elector. La Comisión Estatal de
7 Elecciones seleccionará, mediante sorteo, una figura geométrica que representará cada una de las
8 opciones. Dicha figura geométrica aparecerá en la parte superior de la columna correspondiente
9 a cada opción.

10 En la papeleta que se utilizará para llevar a cabo la segunda consulta aparecerá, a todo lo
11 ancho de la misma y en la parte superior lo siguiente:

12 “Consulta al Pueblo de Puerto Rico Entre Alternativas de Estatus No Coloniales Ni
13 Territoriales”

14 Debajo aparecerán tres (3) columnas, una al lado de la otra, con el texto ennegrecido,
15 para cada una de las opciones de estatus permanente, junto con la definición de cada una de
16 éstas, a tenor con el Artículo 1 de esta Ley, y el símbolo o emblema elegido por el representante
17 certificado de la opción, el cual deberá ser seleccionado conforme al procedimiento que
18 establecerá la Comisión Estatal de Elecciones. Debajo habrá un espacio para la marca del
19 elector. El orden de cada una de las opciones se establecerá mediante sorteo administrado por la
20 Comisión Estatal de Elecciones, según se establece en el Artículo 3 de ésta Ley.

21 Artículo 3.- El sorteo a ser administrado por la Comisión Estatal de Elecciones para
22 determinar las posiciones del orden en que aparecerán las opciones en ambas consultas se
23 realizará no antes de setenta (70) días ni más tarde de noventa (90) días después de la vigencia de

1 esta Ley. Estos sorteos se harán en presencia de los representantes de cada una de las opciones de
2 estatus, si para entonces se han certificado de conformidad con esta Ley.

3 Artículo 4.- La Comisión Estatal de Elecciones anunciará las consultas mediante
4 Proclama, las cuales se publicarán con no menos de sesenta (60) días de anticipación a su
5 celebración en tres (3) periódicos de circulación general en Puerto Rico.

6 Artículo 5.- Elegibilidad para votar: Tendrán derecho a votar en las consultas los
7 residentes de Puerto Rico debidamente calificados como tales conforme a la Ley Núm. 78 del 1
8 de junio de 2011, conocida como el Código Electoral para el Siglo XXI (en adelante “Código
9 Electoral”).

10 Artículo 6.- Los electores que según el Código Electoral tienen derecho al voto ausente o
11 a voto adelantado, tendrán este derecho de conformidad con los procesos adoptados por la
12 Comisión Estatal de Elecciones para las elecciones generales de 2012.

13 Artículo 7.- Los partidos, partidos principales y partidos por petición que, de
14 conformidad con el Código Electoral, estén debidamente inscritos a la vigencia de esta Ley,
15 podrán participar en las dos consultas, representando oficialmente una opción, siempre que sus
16 organismos directivos centrales informen por escrito a la Comisión Estatal de Elecciones de tal
17 intención dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de esta Ley. De no notificar tal
18 intención en este periodo, perderán el derecho preferente de respaldar la opción en cuestión. Si el
19 organismo directivo central de cualquier partido, partido principal o partido por petición dejare
20 de realizar la notificación que dispone esta Ley a la Comisión Estatal de Elecciones
21 representando una de las opciones o, habiéndolo hecho, luego abandona el proceso o acordare
22 recomendar o practicar la abstención electoral en la consulta, la Comisión Estatal de Elecciones
23 procederá a recibir y procesar solicitudes y a expedir certificaciones acreditando a cualquier

1 agrupación de ciudadanos o comité de acción política, según definidos por el Código Electoral,
2 para defender una de las opciones rechazadas o abandonadas por alguno de los partidos, partidos
3 principales o partidos por petición. La agrupación de ciudadanos o comité de acción política será
4 certificado por la Comisión Estatal de Elecciones para efectos de ser el representante oficial de
5 una alternativa de estatus y para la asignación del fondo dispuesto en esta Ley si cumple,
6 además, con los siguientes requisitos:

- 7 (a) La agrupación de ciudadanos o comité de acción política está debidamente inscrita
8 según requerido por la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas
9 Políticas en Puerto Rico.
- 10 (b) A la fecha de su solicitud a la Comisión Estatal de Elecciones: (i) dicha agrupación de
11 ciudadanos o comité de acción política existía y tenía un público y reconocido
12 historial de defensa de la opción de estatus de que se trate; (ii) estuviese integrado su
13 organismo directivo central en parte por personas que estuviesen afiliadas a una o
14 más agrupaciones, organizaciones o entidades que previo a la celebración de la
15 solicitud existían y tenían un público y reconocido historial de defensa de la fórmula
16 de estatus que promueva la actual agrupación de ciudadanos o comité de acción
17 política; o (iii) que aún no habiendo existido a la fecha de vigencia de esta Ley, una
18 parte sustancial de los miembros de su organismo directivo central haya pertenecido a
19 algún partido con un público y reconocido historial de defensa de la opción de estatus
20 que se proponen representar durante la consulta.
- 21 (c) Que dicha agrupación de ciudadanos o comité de acción política interese participar
22 activamente en la consulta propuesta, en apoyo de la fórmula de estatus vacante y

1 que, en efecto, su organismo directivo central haya tomado la decisión
2 correspondiente de participar en dicha consulta.

3 (d) Que la agrupación de ciudadanos o comité de acción política que representará la
4 opción de estatus vacante notifique en su solicitud escrita a la Comisión Estatal de
5 Elecciones los nombres y direcciones de los miembros que constituyan el organismo
6 directivo central de dicha agrupación. Los nombres de los miembros del comité
7 directivo deberán aparecer en la certificación que emita la Comisión Estatal de
8 Elecciones si procediera la solicitud.

9 (e) Esta solicitud de certificación de una agrupación de ciudadanos o comité de acción
10 política deberá estar acompañada de una lista que contenga un número de endosos de
11 no menos de cuatro (4,000) electores hábiles para votar. Tales peticiones sólo podrán
12 ser suscritas por electores que tengan derecho a votar y estén registrados ante la
13 Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones preparará los
14 formularios de endoso y los hará disponibles con suficiente tiempo de anticipación,
15 de modo que la agrupación de ciudadanos o comité de acción política pueda cumplir
16 oportunamente con el requisito de presentación de endosos que aquí se dispone.

17 (f) En caso de que en la segunda consulta exista más de una agrupación de ciudadanos o
18 comité de acción política que cumpla con los requisitos para ser debidamente
19 certificado como representante de la misma opción vacante de estatus, la certificación
20 se concederá al primero de éstos que cumpla con todos los requisitos aquí dispuestos.
21 Disponiéndose, no obstante, que ningún partido, partido principal, partido por
22 petición, agrupación de ciudadanos o comité de acción política podrá representar,
23 para fines de esta Ley, a más de una de las opciones de estatus según establecidas.

1 (g) La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las normas que regirán lo relativo a la
2 solicitud, al formulario especial y a los procedimientos que deberán observarse para
3 implantar lo dispuesto en este Artículo.

4 (h) Las agrupaciones de ciudadanos y los comités de acción política podrán presentar su
5 solicitud al amparo de este Artículo en cualquier momento desde la aprobación de
6 esta Ley. No obstante, dicha solicitud será considerada si la opción que la agrupación
7 de ciudadanos o comité de acción política solicita representar es dejada vacante por
8 los partidos, partidos de mayoría y partidos por petición por haber vencido el término
9 dispuesto en esta Ley para ejercer su derecho preferente para respaldar una de las
10 opciones, o si alguno de éstos, luego de aceptar la opción, abandona el proceso o
11 acordare recomendar o practicar la abstención electoral en la Consulta.

12 Artículo 8.- La Comisión Estatal de Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar,
13 dirigir, implantar y supervisar el proceso de consultas dispuesto en esta Ley, así como cualquier
14 otra función que en virtud de esta Ley se le confiera o sea necesario para cumplir con los
15 propósitos de la misma.

16 Artículo 9.- La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las reglas que regirán ambas
17 consultas con por lo menos sesenta (60) días de antelación a la celebración de la primera
18 consulta. La adopción y enmiendas a este Reglamento se harán de conformidad con el Código
19 Electoral.

20 Artículo 10.- La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de
21 información y orientación sobre las consultas a celebrarse, instando al electorado a inscribirse y a
22 participar en la misma; sobre la forma en que el elector debe marcar las papeletas para consignar
23 en ella su voto; y el contenido de las definiciones de cada una de las opciones de estatus. Para

1 dichas campañas, la Comisión Estatal de Elecciones utilizará todos los medios de comunicación
2 y técnicas de difusión pública a su alcance, incluyendo medios electrónicos. Las mismas deben
3 iniciarse con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha en que se celebrarán las
4 consultas. Como parte de la fase de información y orientación, estas campañas reproducirán
5 textualmente en los medios de comunicación las definiciones de las opciones del estatus,
6 ofreciendo igual exposición a cada opción.

7 Artículo 11.- El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar una
8 certificación de los resultados de las consultas al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea
9 Legislativa y al Secretario de Estado, no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de
10 haber finalizado el escrutinio. El Gobernador, a su vez, certificará el resultado al Presidente y al
11 Congreso de Estados Unidos. En caso de que la mayoría del electorado haya votado en contra de
12 la continuación de la presente relación política territorial y a favor de alternativas no coloniales
13 ni territoriales, el Gobernador deberá notificar al Presidente y al Congreso de Estados Unidos
14 que el Pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad de cambiar dicha relación. Si el Pueblo
15 se ha expresado a favor de una alternativa no colonial ni territorial en particular, el Gobernador
16 deberá requerir al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que actúen efectivamente para
17 hacer realidad la voluntad libre y democrática expresada por el Pueblo de Puerto Rico. De igual
18 manera, el Gobierno de Puerto Rico establecerá los procesos necesarios para viabilizar dicha
19 expresión.

20 La certificación del Gobernador deberá leer: “El Pueblo de Puerto Rico exige al
21 Congreso de Estados Unidos y al Presidente responder efectivamente a la voluntad expresada
22 por el Pueblo de Puerto Rico para que se inicie el proceso de transición hacia
23 _____”, según su expresión libre y democrática.

1 En el espacio provisto al final de la certificación se insertará el nombre de la opción que
2 resulte triunfadora en la segunda consulta.

3 Artículo 12.- La Comisión Estatal de Elecciones conservará todas las papeletas y actas de
4 escrutinio correspondientes a las consultas por un término no menor de noventa (90) días, a partir
5 de la certificación de los resultados. Una vez transcurrido dicho término, podrán ser destruidas,
6 salvo que estuviese pendiente algún recurso judicial o administrativo, en cuyo caso se
7 conservarán hasta que finalice el proceso o hasta que la decisión del tribunal advenga final y
8 firme.

9 Artículo 13.- Se asignará la cantidad total de tres millones quinientos mil dólares
10 (\$3,500,000) a la Comisión Estatal de Elecciones del Fondo General para sufragar los gastos de
11 celebración de las consultas dispuestas por esta Ley, los cuales se distribuirán de la siguiente
12 forma:

13 (a) La cantidad de doscientos cincuenta mil dólares (\$250,000) para gastos
14 organizacionales y operacionales relacionados con la celebración de las
15 consultas.

16 (b) La cantidad de setecientos cincuenta mil dólares (\$750,000) para gastos de
17 campaña de orientación e información, según establecido en esta Ley.

18 (c) Para los gastos de los partidos, partidos de mayoría y partidos por petición que
19 participen del proceso de conformidad con el Artículo 7 de esta Ley, y de
20 cualquier agrupación de ciudadanos o comité de acción política debidamente
21 certificado para representar una de las opciones de estatus, sujeto a lo
22 dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley, se asignará la cantidad de dos millones

1 quinientos mil dólares (\$2,500,000), que serán divididos de la siguiente
2 manera:

3 i. Un millón de dólares (\$1,000,000), a ser distribuido
4 equitativamente entre todos los representantes certificados que
5 participen de la primera consulta;

6 ii. Quinientos mil dólares (\$500,000) para el representante
7 certificado que apoye la opción de la Estadidad en la segunda
8 consulta;

9 iii. Quinientos mil dólares (\$500,000) para el representante
10 certificado que apoye la opción de la Independencia en la
11 segunda consulta;

12 iv. Quinientos mil dólares (\$500,000) para el representante
13 certificado que apoye la opción del Estado Libre Asociado
14 Soberano fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de
15 Estados Unidos en la segunda consulta.

16 Cada partido, partido principal, partido por petición, agrupación de ciudadanos o comité
17 de acción política debidamente certificado para participar de la segunda consulta podrá
18 representar sólo una (1) alternativa. En la primera consulta podrá haber más de un partido,
19 partido principal, partido por petición, agrupación de ciudadanos o comité de acción política
20 representando la misma alternativa, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 7(h) de esta Ley.

21 Artículo 14.- Cualquier partido, partido principal, partido por petición, agrupación de
22 ciudadanos o comité de acción política certificado para representar una de las opciones de
23 estatus, según lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley, que se haya acogido al financiamiento

1 público dispuesto en el Artículo 13 de esta Ley y que luego retire su participación en la consulta,
2 o aquel que, luego de aceptar la opción, abandone el proceso o acordare recomendar o practicar
3 la abstención electoral en la consulta, vendrá obligado a devolver al Secretario de Hacienda la
4 cantidad total recibida más el interés legal. Además, las cantidades recibidas y no utilizadas para
5 los propósitos dispuestos en esta Ley deberán ser devueltas al Secretario de Hacienda. Las
6 partidas asignadas en esta Ley no podrán ser utilizadas para campañas a puestos electivos u otras
7 campañas ajenas a los propósitos de esta Ley.

8 Artículo 15.- A los gastos realizados y a las contribuciones recibidas por los partidos
9 políticos, agrupaciones de ciudadanos o comités de acción política les aplicarán las disposiciones
10 establecidas en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto
11 Rico.

12 Artículo 16.- Las prohibiciones y delitos relacionados con la celebración de estas
13 consultas se regirán por las disposiciones establecidas en el Código Electoral y por la Ley para la
14 Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, salvo que sean
15 incompatibles con esta Ley.

16 Artículo 17.- Todo tipo de revisión judicial relacionada con la celebración de las
17 consultas se regirá por las disposiciones establecidas en el Código Electoral y por la Ley para la
18 Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, según aplique.

19 Artículo 18.- El Código Electoral y los reglamentos aprobados en virtud del mismo se
20 considerarán supletorios a la presente Ley y sus disposiciones se aplicarán a todos los
21 procedimientos relacionados con la celebración de las consultas, salvo que sean incompatibles
22 con lo aquí dispuesto. La Comisión Estatal de Elecciones está facultada para adoptar los

1 reglamentos o resoluciones que sean necesarios para que los propósitos de ésta Ley se cumplan,
2 de forma eficaz y equitativa.

3 Artículo 19.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada
4 inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará ni
5 invalidará el resto de las disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado
6 a la cláusula, párrafo, artículo o parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.

7 Artículo 20- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.